GOBIERNO DE PUERTO RICO

17^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 252

15 de enero de 2013

Presentado por los señores *Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Rivera Schatz, Martínez Santiago*; las señoras *Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez* y el señor *Pérez Rosa*.

Referido a la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social

LEY

Para crear la “Ley del Negociado de Protección a Menores Víctimas de Abuso Sexual”, mediante la cual se establece el mencionado Negociado, con el objetivo dual de (1) coordinar eficazmente la investigación interagencial de referidos sobre alegaciones de abuso sexual a menores, para la radicación, recopilación de evidencia y trámite efectivo de casos criminales por dicho delito, o cualquier causa civil derivada del mismo, y (2) proveer tratamiento al (a la) menor víctima, y los miembros de su núcleo familiar inmediato, que no sean ofensores, permitiéndole reponerse de los daños provocados por el abuso sexual cometido; para disponer sobre el funcionamiento del Negociado, su estructura y presupuesto; para añadir un inciso (q) al Artículo 9 de la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer la obligación de la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia de establecer el memorando de entendimiento para cumplir los propósitos de esta Ley; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según estadísticas de la Administración de Familias y Niños, para el año 2008 había en Puerto Rico, 36,002 casos activos de menores, relativos a las diferentes clases de maltrato o negligencia tipificada, incluido el abuso sexual. Así también, de un escrito titulado “Análisis sobre la Atención y el Manejo Interagencial de Alegaciones de Abuso Sexual a Menores”, preparado por el Comité Interagencial de Abuso Sexual a Menores, fechado 24 de junio de 2008, surge la siguiente información:

- el abuso sexual a menores es un problema grave que afecta el crecimiento y el desarrollo de una cantidad significativa de menores de cero (0) a dieciocho (18) años en Puerto Rico;
- para el año fiscal 2006-2007, se reportaron diecinueve mil sesenta y siete (19,067) casos de maltrato a menores, de los cuales dos mil treinta y cuatro (2,034) fueron de abuso sexual intrafamiliar, de acuerdo a estadísticas del Departamento de la Familia; y
- del número total de casos atendidos, por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) durante el año 2006, el cincuenta y siete punto ocho (57.8) por ciento eran menores de catorce (14) años.

Ciertamente, estas cifras alarmantes constituyen un reflejo de la realidad social que impera en Puerto Rico, en la cual se desenvuelve día a día nuestra niñez y juventud. Ante tan lamentable panorama, los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico para erradicar este mal creciente no pueden cesar. Reconocemos que la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, fue adoptada, entre otras cosas, con el objetivo primordial de establecer una nueva política pública sobre la protección de los menores, basada en facilitar la coordinación multisectorial y entre las agencias y para asegurar que los procedimientos en los casos de maltrato de menores se atiendan con diligencia. No obstante, resulta indispensable reforzar las estrategias incorporadas a dicha legislación, mediante la instauración de métodos innovadores que en el resto de la Nación, han probado ser efectivos para combatir y prevenir eficientemente esta problemática.

Como es generalmente conocido, en los casos de abuso sexual de menores, diferentes agencias gubernamentales aúnan sus esfuerzos para investigar y procesar a los ofensores(as), en especial, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. Sin embargo, precisamente por tratarse de abuso sexual contra menores, recopilar la evidencia necesaria, así como presentarla de manera que estos casos prosperen en los tribunales, es una labor muy ardua que con frecuencia se torna infructuosa. Se ha observado la tendencia de que los menores no están dispuestos a declarar en los momentos cruciales, o que se retractan de sus declaraciones, cuando su testimonio es esencial para lograr una convicción o resarcimiento en tales casos. Además, se ha constatado que usualmente los menores que atraviesan estos procesos, son lacerados inadvertidamente, al estar expuestos a múltiples y repetitivas entrevistas llevadas a cabo por las entidades

gubernamentales, antes referidas. Lo anterior hace que las víctimas revivan constantemente el abuso sexual sufrido.

Esta Ley propone establecer el Negociado de Protección a Menores (en adelante, “Negociado”) dentro de la estructura del Departamento de la Familia de Puerto Rico, a ser dirigido por un(a) Director(a) nombrado por el(la) Secretario(a) del mencionado Departamento. Cabe enfatizar que el Negociado tendrá a su cargo la encomienda de coordinar y ejecutar eficientemente la investigación interagencial de referidos del Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y de la Policía de Puerto Rico, sobre alegaciones de abuso sexual a menores. Dicho esfuerzo conjunto tiene un fin dual: (1) la investigación, recopilación de evidencia, radicación y trámite efectivo de casos criminales por el mencionado delito, y cualesquiera otras acciones legales correspondientes relacionadas a éstos, ante los tribunales; y (2) el cernimiento del daño causado, seguido por el tratamiento médico y psicológico idóneo para cada víctima. Todo ello, como parte de una respuesta multidisciplinaria e interagencial ante alegaciones de dicha índole, a fin de no exponer al(a la) menor concernido(a) a una revictimización en el transcurso de este proceso.

Para la consecución de los fines de esta Ley, el Negociado contará con el apoyo de un equipo multidisciplinario que, además de estar integrado por funcionarios(as) y empleados(as) administrativos del Negociado, comprenderá a otros(as) de las agencias gubernamentales previamente indicadas, incluyendo a profesionales del campo de la medicina, salud mental, la psicología y de las ciencias del comportamiento. Estos últimos trabajarán en el Negociado para atender los casos de abuso sexual que sean referidos al mismo, basándose en un plan de acción plasmado en un memorando de entendimiento interagencial, que agilizará y hará más eficaz el procesamiento de los ofensores de abuso sexual contra menores, desde las etapas más tempranas de investigación. Lo anterior, sin que los(as) menores involucrados(as) en estos casos sean perjudicados por quienes deberían protegerlos y brindarles justicia y tomando en consideración siempre el bienestar del menor, anteponiendo sus necesidades durante todo el proceso.

Aclaremos que la idea de establecer el Negociado de Protección a Menores del Departamento de Familia, con el apoyo de su equipo multidisciplinario, incorpora elementos de los Centros, conocidos como: *Child Advocacy Centers* (C.A.C. por sus siglas en inglés), que actualmente operan en las diversas jurisdicciones estatales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Estos son acreditados por el *National Children’s Alliance* (N.C.A. por sus siglas en

inglés) y han operado con muchísimo éxito en su encomienda. Por todo lo cual, en aras de hacer justicia a todos esos(as) menores que son vilmente despojados de su inocencia, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera propio promulgar la presente Ley.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.-

2 Esta Ley se conocerá como “Ley del Negociado de Protección a Menores Víctimas de
3 Abuso Sexual.”

4 Artículo 2.- Definiciones.-

5 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que
6 se indica a continuación, a menos que dentro de su contexto se desprenda otro significado:

7 (a) “Abuso sexual”, significará incurrir en conducta sexual en presencia de un(a)
8 menor o que se utilice a un(a) menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar conducta
9 sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de procesarse por la vía criminal,
10 configuraría cualesquiera de los siguientes delitos: agresión sexual, actos lascivos, comercio
11 de personas para actos sexuales, exposiciones obscenas, proposición obscena, producción de
12 pornografía infantil, posesión y distribución de pornografía infantil, utilización de un menor
13 para pornografía infantil, envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o
14 posesión de material obsceno y espectáculos obscenos, según han sido tipificados en el
15 Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

16 (b) “Director(a)”, significará el (la) Director(a) del Negociado de Protección a
17 Menores, Víctimas de Abuso Sexual que en virtud de esta Ley se crea.

18 (c) “Menor”, significará toda persona que no haya cumplido dieciocho (18) años de
19 edad.

1 (d) “Negociado”, significará el Negociado de Protección a Menores Víctimas de
2 Abuso Sexual, adscrito al Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico, que en
3 virtud de esta Ley se crea.

4 (e) “Secretario”, significará Secretario(a) del Departamento de de la Familia del
5 Gobierno de Puerto Rico.

6 (f) “Junta”, significará la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la
7 Familia, creada en virtud de la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad,
8 Bienestar y Protección de Menores”.

9 (g) Doctores en medicina, Pediatras y Psiquiatras de niños y adolescentes, significará
10 profesional debidamente licenciado para ejercer la medicina y certificado para practicar su
11 especialidad o subespecialidad por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica conforme
12 a las disposiciones de Ley.

13 (h) Enfermeros examinadores forenses, significará la persona autorizada por la Junta
14 Examinadora de Enfermeras y Enfermeros, para ejercer la profesión de enfermería, según
15 dispuesto en la Ley para Reglamentar la Práctica de la Enfermería en el Estado Libre
16 Asociado de Puerto Rico.

17 (i) Trabajadores Sociales, significará el profesional en trabajo social, graduado de una
18 institución acreditada, con licencia expedida por la Junta Examinadora de Trabajadores
19 Sociales, según definidos en Ley.

20 (j) Psicólogos, significará el profesional licenciado por la Junta Examinadora de
21 Psicólogos del Estado Libre Asociado, según definido en la Ley Núm. 96 de 4 de junio de
22 1983, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión
23 de la Psicología en Puerto Rico”, que posea adiestramiento, conocimientos o destrezas en el

1 ofrecimiento de servicios que incluyen, pero no se limitan a: prevención, descripción o
2 diagnóstico del comportamiento, evaluación psicológica, intervención terapéutica con
3 problemas psicológicos de diversos niveles de severidad y consultoría concerniente al
4 funcionamiento intelectual, emocional, conductual, interpersonal, familiar, social y
5 ocupacional de individuos o grupos.

6 Artículo 3.- Creación del Negociado de Protección a Menores; propósito.-

7 Se crea el Negociado de Protección a Menores Víctimas de Abuso Sexual, adscrito al
8 Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico, bajo la supervisión directa e
9 indelegable del (de la) Secretario(a) de la Familia. El propósito principal del Negociado será
10 coordinar eficazmente la investigación interagencial y procesamiento de referidos sobre
11 alegaciones de casos de abuso sexual a menores, para la radicación, recopilación de evidencia
12 y trámite efectivo de casos criminales por dicho delito y cualesquiera otras acciones legales
13 correspondientes, relacionadas a éstos, ante los tribunales. Asimismo, contará con materiales
14 y equipos pertinentes para los servicios a ofrecer, instalaciones apropiadas, ambientadas para
15 recibir a menores, donde en un mismo edificio se efectuarán entrevistas y exámenes médicos
16 forenses, entrevistas, evaluaciones psicológicas y forenses y otros servicios correspondientes,
17 tales como, pero sin limitarse a, intervenciones de consejería, psicoterapia y consultoría para
18 que el menor víctima de abuso sexual y los miembros de su grupo familiar inmediato puedan
19 reponerse de los daños provocados por dicha transgresión. Todo ello, como parte de una
20 respuesta multidisciplinaria e interagencial ante alegaciones de dicha índole, a fin de no
21 exponer al menor concernido a una revictimización en el transcurso de este proceso.

22

1 Artículo 4.- Director del Negociado de Protección a Menores.-

2 El Negociado estará bajo la administración de un Director, el cual será nombrado por
3 el (la) Secretario(a) de la Familia.

4 Artículo 5.- Personal.-

5 El Secretario, en coordinación con el Director, será la autoridad nominadora del
6 Negociado y podrá nombrar profesionales de la salud, profesionales de trabajo social,
7 personal técnico, de oficina, o de cualquier otra índole que estime necesario o conveniente
8 para el desempeño eficiente del Negociado. Asimismo, el Secretario estará facultado para
9 fijar la remuneración de dicho personal, de conformidad al reglamento que a tal efecto
10 adoptará, y autorizará los gastos que sean necesarios para llevar a cabo los fines de esta Ley.

11 Artículo 6.- Equipo Multidisciplinario.-

12 El Negociado llevará a cabo sus funciones con el apoyo de un equipo
13 multidisciplinario integrado, entre otros, por funcionarios o empleados del Negociado, de la
14 Policía de Puerto Rico, del Departamento de la Familia, del Departamento de Salud, el
15 Departamento de Educación o del Departamento de Justicia, incluyendo a Fiscales,
16 Procuradores de la Familia, profesionales del campo de la medicina, psicología y de las
17 ciencias del comportamiento, y cuya función primordial sea atender los casos de abuso sexual
18 que le sean referidos al Negociado para el cual prestan sus servicios. Dicho equipo será
19 formado, entre otros, por los siguientes:

20 (a) Fiscales. Los fiscales que integren el referido equipo tomarán la decisión
21 sobre la radicación de cargos de abuso sexual, o cualquier otra acción correspondiente ante
22 los tribunales. Como parte de los acuerdos de colaboración, el Departamento de Justicia, por

1 conducto del Secretario de Justicia, podrá designar Fiscales y personal de las Unidades
2 Especializadas de Maltrato de Menores, en calidad de destaque para laborar en el Negociado;

3 (b) Oficiales Investigadores de la Policía de Puerto Rico. Tales oficiales
4 colaborarán con los demás funcionarios del negociado en la investigación y tramitación de los
5 referidos, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, la recopilación de evidencia
6 del evento alegado de abuso sexual;

7 (c) Trabajadores sociales. Los trabajadores sociales investigarán alegaciones de
8 abuso sexual a menores. Trabajarán conjuntamente con los oficiales investigadores de la
9 Policía de Puerto Rico. Los trabajadores sociales evaluarán la seguridad de los menores
10 dentro de su hogar y desarrollarán planes de seguridad cuando sea necesario. Estos podrán,
11 en coordinación con los demás funcionarios del Negociado, referir al padre, madre o menor
12 concernido a múltiples recursos dentro de la comunidad;

13 (d) Doctores en medicina, Pediatras, Psiquiatras de niños y adolescentes, y
14 enfermeros(as) examinadores(as) forenses. Estos tendrán experiencia en el examen de
15 menores por motivo de alegado abuso sexual, y proveerán exámenes médicos forenses en las
16 instalaciones del Negociado. Además, estarán adiestrados(as) especialmente en el manejo de
17 casos en que se alega abuso sexual y físico de menores. El componente médico-forense
18 incluirá: el historial médico; la evaluación del daño utilizando un “*medscope*” u otro
19 dispositivo médico similar, además de cualquier otro equipo apto para la foto-documentación
20 de los hallazgos; exámenes o pruebas para la detección de enfermedades de transmisión
21 sexual; e instrucciones para los referidos, prevención y opciones de tratamiento;

22 (e) Psicólogos(as). Los psicólogos laborarán en las instalaciones del Negociado y
23 proveerán asistencia y consultoría para determinar cómo el abuso sexual ha afectado al menor

1 y los miembros del núcleo familiar inmediato que no sean ofensores, así como qué puede
2 hacerse para ayudarlos a sanar de la experiencia sufrida, con relación al abuso sexual del
3 menor. En coordinación con el Director, los psicólogos realizarán entrevistas, evaluaciones
4 psicológicas y forenses; proveerán consejería y psicoterapia individual, grupal y familiar,
5 enfocada y diseñada específicamente para atender casos de abuso sexual a menores, y
6 trabajarán con el objetivo de promover y restaurar el funcionamiento normal de desarrollo y
7 asistir al padre, madre o custodio legal del menor, así como a los demás miembros del núcleo
8 familiar inmediato, para sobreponerse de la crisis entre otros asuntos; y

9 (f) Defensores del menor. Estos serán personas que cursan estudios universitarios
10 a nivel de maestría o doctorado en psicología o trabajo social para desempeñar las funciones
11 de asistir, orientar y apoyar a la víctima y sus miembros familiares o encargados, durante
12 cualquier proceso criminal o civil, relativo a cualquier caso de abuso sexual referido al
13 Negociado.

14 Se dispone que personal voluntario podrá desempeñarse como defensor del menor,
15 siempre y cuando:

16 (1) esté certificado por una entidad especializada, como la *National Children's*
17 *Alliance*, o el *National Children Advocacy Center*; o

18 (2) sea un(a) estudiante de psicología o trabajo social, debidamente matriculado en
19 una institución de enseñanza superior, debidamente licenciada por el Consejo de Educación
20 Superior de Puerto Rico, que esté tomando cursos de práctica a nivel de maestría o doctorado
21 en dichas profesiones.

22 Igualmente, el personal voluntario podrá ser elegible para realizar labores de defensor
23 del menor, si recibe adiestramiento del propio Negociado para llevar a cabo las funciones

1 correspondientes. En todos los casos, el personal voluntario laborará bajo la supervisión de
2 los funcionarios del Negociado, según dicho supervisor sea designado por el Director.

3 Los integrantes del equipo multidisciplinario pertenecientes a agencias o entidades
4 gubernamentales que no sean del Negociado, podrán laborar en el Negociado en calidad de
5 destaque, y coordinarán sus funciones, de manera que el menor víctima de abuso sexual no
6 sea re-victimizado(a) como resultado del proceso iniciado por el referido o reporte al
7 Negociado. Para este fin, basarán su plan de acción en un memorando de entendimiento
8 interagencial.

9 Tanto los empleados o funcionarios del Negociado, como aquellos adscritos a las
10 agencias antes mencionadas, deberán tomar cursos especializados que les capaciten para el
11 pleno y cabal descargo de sus funciones dentro del equipo multidisciplinario. La selección de
12 estos cursos será realizada por el Director, en coordinación con el Secretario.

13 Artículo 7.- Memorando de entendimiento interagencial.-

14 Dentro de los treinta días, a partir de la aprobación de esta Ley, la Junta Transectorial
15 Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia, creada en virtud del Artículo 9 de la Ley
16 Núm. 246-2011, establecerá un memorando de entendimiento interagencial.

17 El memorando de entendimiento interagencial será un acuerdo escrito que formalizará
18 la cooperación interagencial entre las distintas agencias, incluyendo a la Policía de Puerto
19 Rico, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de
20 Educación, el Departamento de Justicia y el Negociado. El mismo constituirá un compromiso
21 de las agencias, a cumplir con las prácticas y política del Negociado, o del equipo
22 multidisciplinario de éste, con respecto a las labores que competen a cada integrante, para que
23 éstas se lleven a cabo de forma ordenada y eficaz. Este acuerdo será suscrito por cada uno de

1 los miembros de la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia o sus
2 representantes debidamente autorizados, con el objetivo de coordinar la interacción de los
3 miembros del equipo multidisciplinario pertenecientes a las agencias al momento de atender
4 las alegaciones de casos de abuso sexual contra menores que hayan sido referidos al
5 Negociado. Dicho memorando contendrá disposiciones cónsonas con los deberes,
6 obligaciones y facultades fijadas por la Ley Núm. 246-2011, conocida como la “Ley para la
7 Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.

8 Como parte del memorando de entendimiento interagencial, se establecerá un
9 protocolo que delimite y organice el ejercicio de las respectivas funciones de los miembros
10 del equipo multidisciplinario del Negociado con relación a la investigación, discusión,
11 determinación, revisión y acciones a tomar en cuanto a los casos de abuso sexual contra
12 menores reportados al Negociado. Disponiéndose, que el mismo proveerá, entre otras cosas,
13 para que los referidos de abuso sexual contra menores se comiencen a atender no más tarde
14 de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido reportados al Negociado.

15 Artículo 8.-Acuerdos colaborativos.-

16 El Director estará facultado para establecer acuerdos colaborativos entre el Negociado
17 y entidades públicas o privadas, cuyo propósito sea tratar o prevenir el abuso sexual contra
18 menores, bien sea atendiendo casos individuales, o proveyendo recursos educativos para
19 erradicar dicho mal social.

20 Artículo 9.- Instalaciones del Negociado.-

21 La sede del Negociado estará situada en el Municipio de San Juan, y será determinada
22 por el(la) Secretario(a). Para los fines de esta Ley, durante el primer año de vigencia de la
23 misma, se establecerá un primer Centro del Negociado en el Distrito de San Juan. El

1 Secretario solicitará la propiedad inmueble necesaria para las operaciones del Negociado, de
2 acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Adquisición y Disposición de Propiedades de la
3 Autoridad de Edificios Públicos. Disponiéndose, que la propiedad inmueble donde estará sito
4 el Negociado, deberá cumplir con las especificaciones de espacio, localización, cupo y
5 ambientación establecidas por la *National Children's Alliance* para la certificación de centros
6 de ayuda a niños víctima de abuso sexual.

7 Artículo 10.- Expansión del Negociado.-

8 Según la disponibilidad de recursos lo permita, el Secretario, en coordinación con la
9 Junta, podrán establecer centros regionales a través de la Isla, hasta un máximo de ocho (8).
10 Los referidos centros habrán de distribuirse utilizando como guía los distritos judiciales ya
11 establecidos.

12 Artículo 11.- Presupuesto del Negociado.-

13 Se asigna al Departamento de la Familia la cantidad de un millón (\$1,000,000.00), de
14 fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para fines de la operación del Negociado de
15 Protección a Menores Víctima de Abuso Sexual adscrito al Departamento de la Familia,
16 durante el año fiscal 2012-2013. Para los años fiscales subsiguientes, el Departamento de la
17 Familia incluirá dentro de su petición presupuestaria, una partida específica de fondos
18 públicos que habrá de destinarse para la operación y expansión del Negociado de Protección a
19 Menores, adscrito a dicho Departamento.

20 Artículo 12.- Se añade un inciso (q) al Artículo 9 de la Ley Núm. 246-2011, para que
21 el mismo lea como sigue:

22 “Artículo 9.-Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia

1 Se crea la "Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia", la
2 cual tendrá la encomienda de coordinar, apoyar y promover los esfuerzos colaborativos entre
3 las agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, para garantizar la más
4 eficiente y efectiva atención de los casos de maltrato y/o maltrato institucional, negligencia
5 y/o negligencia institucional. También ofrecerá y promoverá servicios de prevención, apoyo y
6 tratamiento a menores víctimas de maltrato y/o maltrato institucional y a sus familias, y
7 apoyará los esfuerzos comunitarios dirigidos a dichos fines. A estos fines, deberá planificar,
8 delinear estrategias, fomentar la investigación y auditorías y desarrollar planes de acción con
9 comités de trabajo dirigidos a diferentes temas.

10 La Junta tendrá las siguientes obligaciones:

11 a. Promover el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las agencias del
12 Gobierno de Puerto Rico para la implantación de esta Ley.

13 b. Facilitar la aprobación y el cumplimiento de acuerdos colaborativos
14 interagenciales y con otras organizaciones no gubernamentales, de manera que se facilite la
15 labor integrada en la prevención del maltrato a menores y el ofrecimiento de servicios para el
16 bienestar y la protección integral de la niñez, en consonancia con la política pública aquí
17 enunciada.

18 c. ...

19 ...

20 q. *Adaptar y promover el desarrollo del Negociado de Protección a Menores*
21 *Víctimas de Abuso Sexual, según creado por Ley, a los fines de lograr el cumplimiento de los*
22 *acuerdos colaborativos interagenciales con el objetivo dual de (1) coordinar eficazmente la*
23 *investigación interagencial de referidos sobre alegaciones de abuso sexual a menores, para*

1 *la radicación, recopilación de evidencia y trámite efectivo de casos criminales por dicho*
2 *delito, o cualquier causa civil derivada del mismo, y (2) proveer tratamiento al(a la) menor*
3 *víctima, y los miembros de su núcleo familiar inmediato, que no sean ofensores,*
4 *permitiéndole reponerse de los daños provocados por el abuso sexual cometido.*

5 . . .”

6 Artículo 13.- Vigencia.-

7 Esta Ley comenzará a regir a partir de los treinta (30) días de su aprobación.